

# EL DERECHO

PERIÓDICO DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION

*S'il n'y avait pas de justice,  
il n'y aurait ni gouvernement ni société.*

EDOUARD LABOULAYE.

TOMO III

MÉXICO: SÁBADO 16 DE OCTUBRE DE 1869.

NÚM. 16.

## LA CUESTION DE QUERETARO.

### ARTICULO I.

La prensa de esta capital ha publicado recientemente algunos ocursos presentados ante la 3ª Sala de la Suprema Corte de Justicia, concernientes á la controversia que ha iniciado el Gobernador de Querétaro sobre el cumplimiento y aplicacion de los acuerdos que adoptó el Cuerpo legislativo el 8, el 15 y el 31 de Mayo próximo pasado. A título de escritores públicos y de profesores del Derecho, nos consideramos obligados á estudiar seriamente la cuestion indicada, y á emitir nuestra opinion sobre los puntos de derecho constitucional que ella entraña. No pretendemos medir nuestras fuerzas con los atletas de esta lucha, ni hacer alarde de publicistas; nuestro propósito es modesto y muy sincero: queremos cumplir por una parte con el deber que impone el magisterio de la prensa, y por otra, deseamos estimular á las ilustraciones de la época, á fin de que profundicen las cuestiones de nuestro derecho constitucional, facilitando por medio de sus escritos, el estudio árido de los principios de esta ciencia.

Son varios los puntos que comprende la materia de que vamos á ocuparnos; conviene por tanto especificarlos y proponerlos en el mismo orden en que nos hemos determinado á examinarlos:

Primero. ¿La controversia de que habla la frac. 1ª del art. 97 de la Constitucion federal, es disímbola de la que ha instaurado ante la Corte de Justicia el representante del gobernador de Querétaro?

Segundo. ¿La excitativa de la Legislatura de aquel Estado, puede ser materia ú objeto de una controversia ante el poder judicial de la Union?

Tercero. En la hipótesis de que pueda ser materia de una discusion judicial, ¿es competente la Corte Suprema de Justicia?

Analicémos cada una de las cuestiones propuestas, y veamos si podemos resolverlas con arreglo á los preceptos del Código fundamental, discurriendo fria é imparcialmente sobre los hechos que han criado la situacion anómala y violenta del infortunado Estado de Querétaro.

Nuestros lectores conocen ya seguramente la historia de los sucesos deplorables que han difundido la anarquía y la discordia entre los pueblos pacíficos y laboriosos de aquel territorio. Vamos, sin embargo, á referirla en dos palabras, por ser el punto de partida del análisis que nos proponemos hacer, y la base cardinal de nuestros razonamientos.

Acusado el Gobernador ante la Legislatura, por violacion de las leyes y por algunos otros actos de su administracion, se erigió la cámara en jurado, y pronunció su veredicto declarándolo culpable por mayoría de votos. El acusado recurrió al juicio de amparo, y obtuvo sentencia favorable ante el Juez de Distrito; pero venido el expediente á la Suprema Corte de Justicia para la revision del fallo de primera instancia, lo revocó en acuerdo pleno; y quedaron las cosas por el mismo hecho, en el estado que tenian cuando se inició el recurso constitucional del amparo.

Entretanto la legislatura de Querétaro habia dirigido al Cuerpo legislativo una excitativa, para que le concediera la proteccion que garantiza á los Estados el art. 116 del Código fundamental. El Congreso, en vista de la excitativa, consideró llegado uno de los dos casos

previstos en el artículo citado, y el 8 de Mayo comunicó al Ejecutivo de la Union, la resolución siguiente:

1º Los poderes de la Union prestarán al Estado de Querétaro la protección á que se refiere el art. 116 del Código fundamental.

2º Comuníquese al Ejecutivo para que obre conforme á sus facultades, garantizando á la legislatura la mas amplia libertad en sus deliberaciones.

Así las cosas, el Gobernador de Querétaro promovió por medio de apoderado constituido en esta capital, la controversia que se ha indicado, reducida á la inconstitucionalidad de la resolución del Cuerpo legislativo, la cual por consiguiente no debe cumplirse, ni aplicarse á la emergencia ó conflicto que la provocó. Iniciada esta controversia ante la 3ª Sala de la Corte, conforme al art. 98 de la ley constitutiva, solicitó el representante del Gobernador de Querétaro, la suspensión del acuerdo de 8 de Mayo, entretanto se sustanciaba y dirimía la contienda propuesta, y la Sala decretó de conformidad, comunicando al Gobierno Supremo esta determinación para los efectos consiguientes.

Conocidos ya los hechos precedentes, se sigue investigar, si la controversia sometida al fallo de la 3ª Sala, es ó no disímbola de la que figura en la frac. 1ª del art. 97, punto primero de los tres en que hemos dividido este estudio.

El texto de este artículo dice: "Corresponden á los tribunales de la Federación, conocer: Primero, de todas las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las *leyes federales*." Es pues claro, que cualquiera otra controversia, cuyo objeto no sea el cumplimiento y aplicación de esas leyes, es disímbola de la especificada en la frac. 1ª del artículo inserto. Ahora bien: la cuestión iniciada por el Gobernador de Querétaro ante el poder judicial de la Union, versa sobre la inconstitucionalidad de los acuerdos de 8, 15 y 31 de Mayo próximo pasado: es así que estos acuerdos no son *leyes federales*; luego la controversia actual es disímbola de la que figura en la frac. 1ª del artículo citado.

"Toda resolución del Congreso, dice el artículo 64, no tendrá otro carácter que el de ley ó *acuerdo económico*. Las leyes se comunicarán al Ejecutivo firmadas por el Presidente y dos secretarios, y los acuerdos económicos, por solo dos secretarios." Hay además otra diferencia capital entre las leyes y los acuerdos económicos, la cual consiste en que la confección de éstas tiene trámites y requisitos constitucionales, cuya observancia no obliga respecto de los acuerdos, que son puramente económicos. Se les da este nombre, porque no

establecen nada de nuevo, como las leyes, ni versan sobre negocios generales, como éstas: por lo comun se contraen á la ejecución de disposiciones legislativas preexistentes, á reglas especiales para el gobierno interior de la Cámara, ó á asuntos meramente privados.

El acuerdo del día 8 de Mayo, aprobado por el Congreso en vista de la excitativa de la legislatura de Querétaro, está, segun vimos poco há, concebido en estos términos:

"1º Los Poderes de la Union prestarán al Estado de Querétaro la protección á que se refiere el art. 116 del Código fundamental.

2º Comuníquese al Ejecutivo para que obre conforme á sus facultades, garantizando á la legislatura la mas amplia libertad en sus deliberaciones."

Como se vé, este acuerdo tiene por objeto el cumplimiento ó ejecución de un precepto constitucional, la aplicación nada ménos de la cláusula del pacto federativo, que garantiza á cada uno de los confederados, su autonomía en el régimen ó gobierno interior. En consecuencia, este acuerdo no puede ser objeto de una controversia judicial, por dos razones concluyentes: porque no tiene el carácter de ley, y porque es la ejecución neta, de parte del poder legislativo de la Union, del art. 116 de la Carta federal.

La regla de que los Tribunales de la Federación son competentes para conocer de la controversia que se suscite sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales, supone que los controversistas son personas privadas, esto es, litigantes del orden comun. Los poderes públicos, ya sea de la Union, ó ya de los Estados, no pueden comparecer ante la autoridad judicial ni como actores, ni como reos, cuando se trata exclusivamente del cumplimiento y aplicación de aquellas leyes. Solo subvirtiendo los principios elementales del derecho constitucional puede concebirse el absurdo, de que el poder legislativo, el ejecutivo ó el judicial, sea parte legítima para pedir ante un Tribunal el cumplimiento de dichas leyes ó su anti-constitucionalidad.

Y si bien puede ocurrir el caso de que la autoridad federal vulnere ó restrinja la soberanía de los Estados, ó que estos invaden la esfera del poder de la Union, este desequilibrio solo puede remediarse empleando el recurso prescrito en el artículo 101 y 102 del pacto federativo. Bien entendido, que en el caso de esta perturbación no figuran los poderes públicos como litigantes en el juicio de amparo, sino individuos particulares, á quienes protege y defiende la justicia federal del agravio ó perjuicio que les irroga la ley ó el auto de la autoridad agresora.

Conforme al artículo 97, de cuya inteligencia genuina nos ocupamos, solo en dos casos pueden comparecer los Estados ante los Tribunales de la Federación, á saber: cuando se suscita controversia entre dos ó más de ellos, ó cuando se promueve entre un Estado y uno ó más vecinos de otro. La enumeración de los dos únicos casos en que los soberanos confederados consienten en someter sus diferencias á la decisión de los jueces federales, es prueba decisiva de que ninguna otra controversia los comprende, y de que en ninguna otra pueden figurar, ya sea como actores ó ya como reos.

Atendidas las observaciones precedentes, y los artículos constitucionales que hemos men-

cionado, parece evidente que la controversia suscitada por el representante del Gobernador de Querétaro sobre la inconstitucionalidad de los acuerdos de 8, 15 y 31 de Mayo, es disímbola de la que especifica el artículo 97, fracción 1ª, ora se considere el carácter público y la categoría oficial de los controversistas, ora se atienda á la materia ú objeto de la contienda; por consiguiente, queda demostrado el primero de los tres puntos en que hemos dividido este estudio. En el artículo siguiente examinaremos el segundo, á saber: ¿La excitativa de la legislatura del Estado de Querétaro puede ser materia de una controversia ante el poder judicial de la Unión?

## JURISPRUDENCIA

### DISTRITO FEDERAL.

#### JUZGADO 2º DE LO CIVIL.

#### RECURSO DE DENEGADA APELACION.

¿Es ó nó apelable el auto, en que se declara que un juicio debe ser verbal y no escrito?

En 28 de Mayo de 1869, demandó ante el juzgado 2º civil de esta capital, D. J. W. H., asociado de su patrono el Lic. D. Cástulo Barrera, á D. J. M., representado por el Lic. D. Manuel Valay, la desocupación de la casa número 1 de la Estampa de Balvanera, fundándose en ser nuevo dueño de la finca por compra que de ella hizo á D. J. M. M., según la escritura que exhibió. El demandado contestó que no reconocía como dueño al actor, y que fundándose su demanda en la escritura, y debiendo decidirse sobre su validación, el juicio tenía que ser escrito y no verbal, según la disposición del art. 15 de la ley de procedimientos. El actor expuso que la escritura merecía fe y hacía plena prueba, y el reo contestó, que siendo simulada, y habiendo en ella por consiguiente fraude, ni hacía fé ni era plena prueba, porque solo se consideraba como tal, aquella contra la cual nada podía darse, y esta la contradecía desde luego. El primero insistió en que el

juicio debía ser verbal, por no pasar de trescientos pesos la renta anual de la casa; y el segundo, que debía ser escrito. Citados por el señor Juez para la resolución conveniente, pronunció en 5 de Julio el auto siguiente: "México, etc.—Visto en el artículo sobre que la presente demanda debe ventilarse en juicio escrito, porque la excepción opuesta por el demandado envuelve la resolución de un derecho de mayor importancia que el valor de trescientos pesos, que es la cantidad porque debe conocerse en juicio verbal. Considerando: primero, que el actor ha fijado la renta que debe pagar M., á razón de 25 pesos mensuales. Segundo, que la regla que fija el art. 13 de la ley de 4 de Mayo de 1857, para resolver si el juicio en que se intenta la desocupación de una casa, debe ser escrito ó verbal, consiste en que se estime la renta por todo un año. Tercero, que hecha la estimación en el caso presente, resulta, que la renta al año monta á la cantidad de trescientos pesos, y por lo mismo la desocupación debe ventilarse en juicio verbal. Cuarto, que cuando la excepción que se opone en los juicios de esta naturaleza es de mayor cuantía, estos, sin embargo, deben continuarse, reservando dicha excepción para que se ventile en el juicio que corresponda, como lo previene el art. 16 de dicha ley. Por estas consideraciones, y con fundamento de las disposiciones legales citadas, se declara: Primero: que la demanda entablada por D. J. W. H.,



contra D. J. M. sobre desocupacion de la casa núm. 1 de la calle de la Estampa de Balvanera, debe decidirse en juicio verbal. Segundo: se reserva á D. J. M. la excepcion opuesta para que se decida en el juicio que por ella ha de entablarse; y Tercero: se condena á M. al pago de las costas causadas en este artículo. Así lo proveyó y firmó el ciudadano Juez: doy fé.—*Bolado*.—*Manuel Romero*, escribano público.”

Notificado el día 7 el auto anterior á las partes, la de M. apeló, y en 9 del mismo se pronunció el auto siguiente: “En 9 del mismo, dada cuenta al ciudadano Juez, dijo: que siendo contrario á la naturaleza del juicio verbal, el recurso de apelacion interpuesto por la parte del C. J. M., y por lo mismo inadmisibile dicho recurso, se desecha este y se condena en las costas al apelante: y firmó, doy fé.—*Bolado*.—*M. Romero*.”

Hecho saber este auto el mismo día 9, con fecha 10 se presentó la parte de M. promoviendo el recurso de denegada apelacion; y habiendo cambiado el personal del Juzgado 2º, la parte de H. pidió que pasaran estas diligencias al Juzgado 4º, en el que con fecha 12 de Junio mandó el señor Juez, lo que sigue: “En 12 de Junio el ciudadano Juez 4º, á quien se pasaron estas diligencias, acordó se hiciera saber la radicacion, y que estando el demandado conforme con ella, se le expida certificacion de denegada. Y rubricó: doy fé.—Una rúbrica.—*Joaquín Avendaño*, escribano público.”

Tocó conocer de este recurso á la segunda Sala del Tribunal Superior, ante la cual se hizo relacion de él en 27 de Setiembre, é informaron los Sres. Lics. D. Manuel Valay, por la parte de D. J. M., y D. Cástulo Barreda por la otra parte. El primero de estos señores sostuvo que el auto de 5 de Junio era apelable, fundándose para ello, en que por él se variaba el orden del juicio, y de esta especie de autos procede la apelacion, segun enseñan Salgado, part. 4ª, cap. 13, números del 1 al 12; Covarrúbias, Recursos de fuerza, tít. 13, número 21; Gonzalez, in reg. chance. glos. pár. 1º, auct. 3ª, números 201 y 202: en que al designarse la clase de juicio se forma un artículo prejudicial, y de la sentencia que se pronuncia ha lugar á la apelacion, conforme enseña Salgado, de Reg. Protec., cap. 1º, P. 2, números 49 y 50; en que de la designacion y abreviacion de términos, puede apelarse, números 19, 118 y 119: que el auto que fija la naturaleza del juicio, es apelable, y así lo enseña Scacia, quest. 17, limit. 6ª, números 118, 130, 126 y 132, y por último, en que por el principio de jurisprudencia, segun el cual *in dubiis pars tutor eligenda est*, y es mas seguro conceder

la apelacion por ser de origen divino, de derecho natural, y un recurso que ni aun el príncipe absoluto y soberano señor, podia quitar.

El Lic. Barreda, patrono de H., sostuvo por el contrario, que no procedia la apelacion, por oponerse á que se otorgara, la naturaleza de la accion que H. habia deducido contra M., la entidad de la demanda, y el carácter del auto apelado. En cuanto á lo primero, porque aun cuando H. no hubiera deducido su accion sino por escrito, el juicio habria tenido que ser sumario, pues demandaba la desocupacion con el carácter de nuevo dueño, y en virtud del derecho que le concede la ley 19, tít. 8, P. 5ª, teniendo D. J. M. el carácter de arbitrario detentador, por oponerse á la desocupacion. Respecto á lo segundo, conforme á la ley de procedimientos deben ventilarse en juicio verbal las demandas de desocupacion de casa, cuya renta anual no pase como en el caso presente, de \$ 300, y conforme al art. 24, el fallo de estos juicios ne admite otro recurso que el de responsabilidad, ya sea que recaiga sobre el objeto principal del litigio, ya sobre alguno de sus incidentes. Y por último, respecto á la tercera razon, sostuvo ser el carácter del auto meramente interlocutorio, y por consiguiente, que no debia otorgarse la apelacion, conforme á la prevencion explícita de la ley 23, tít. 24, lib. 11, de la N. R., y pidió se condenase á la contraria en las costas, por ser temerario el artículo, é inconducente la excepcion, pues aun cuando hubiese conseguido probar que la escritura era simulada, no por eso obtendria en el litigio.

En 28 de Setiembre sentenció la Sala en los términos siguientes:

“Visto este recurso de apelacion denegada, interpuesto por D. J. M., en los autos que le ha promovido D. J. W. H. sobre desocupacion de casa: visto el auto de 9 de Junio, que negó la apelacion del de 5 del mismo mes, en que se declaró que la demanda entablada por H. contra el apelante, debia de seguirse en juicio verbal, reservando á M. la excepcion opuesta para que se decidiera en el juicio correspondiente, y condenando á éste en las costas del artículo: vistas las constancias remitidas por el inferior, y atento lo expuesto al tiempo de la vista, por los Lics. D. Manuel Valay y D. Cástulo Barreda, patrono el primero de D. J. M. y de D. W. H. el segundo. Considerando: que el auto en que se fija la naturaleza de un juicio, es de los que causan gravámen irreparable en la definitiva: que aunque en los juicios verbales no tiene lugar la apelacion, el punto que va á decidirse en el presente caso, es precisamente si debe ó no procederse en juicio verbal: Por estas consideraciones, y con arreglo á la

ley 23, tít. 20, lib. 11 de la N. R., y por unanimidad: 1º Se revoca el auto de 9 de Julio que declaró inapelable el de 5 del mismo mes. 2º Se admite en ambos efectos la apelacion del auto referido de 5 de Julio último, debiendo pagar cada parte las costas que hubiere causado y las comunes por mitad. Hágase saber, pídanse los autos originales y entrégúense al apelante, para que exprese agravios por el término del derecho. Así lo proveyeron los ciudadanos magistrados que forman la 2ª Sala del Tribunal Superior del Distrito, y firmaron: doy fé.—*Teófilo Robredo*.—*Joaquín Antonio Ramos*.—*Agustín G. Angulo*.—*Emilio Monroy*, secretario.”

SALAS PRIMERA Y TERCERA

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO.

JUGADO 5º DEL RAMO CRIMINAL.

Marzo de 1868.—Setiembre de 1869.

INFANTICIDIO.

El crimen tiene una historia sombría y dolorosa. Aun en el seno de la civilizacion, continúan esos terribles anales desconcertando tantas provisiones filantrópicas y tantos principios que parecen conquistados para siempre por la civilizacion en el terreno del mal y de la ignorancia.

Las pasiones, hé aquí el alimento cotidiano de ese monstruo que se mueve y crece entre las sombras, cuya cuna ha revestido la leyenda bíblica de poéticos colores, y que hoy se siente palpar bajo todos los goces y todos los dolores sociales, como una amenaza vaga y constante.

Alguna vez, delitos que violan todas las leyes de la naturaleza vienen á sorprender y á espantar á aquellas á quienes la casualidad ha colocado en una esfera en donde se dejan sentir los beneficios de la educacion. Hace algun tiempo, en la capital del mundo civilizado, en Paris, se ha sentenciado á muerte á un jóven que, despues de haber dado cincuenta y siete puñaladas á su madre, se acostó al lado del cadáver, y encontrando un poco de calor en la sangre que corria de todas las heridas, declara al otro dia haber pasado una buena noche.\*

Pero cuando la razon misma se siente tur-

bada, es cuando en presencia de una de esas manifestaciones del instinto del mal, se busca en vano un móvil, una causa cualquiera.

¡Acaso esas tendencias á violar los sentimientos morales demostrados hasta por las simples propensiones animales, pertenecerán un dia al dominio de la ciencia, mas bien que al de los tribunales!

Leandra Valderas es una indígena de veintiseis años, de aspecto vulgar y cuya vida no ha pasado hasta hoy sin deslices. Hace algun tiempo tuvo su primer hijo que, segun dice, murió cuando apenas tenia un año, de disenteria. Por los meses de Febrero ó Marzo de 67 contrajo relaciones con un hombre cuyo apellido ignoraba y del que se separó en Junio ó Julio, sintiéndose ya embarazada.

En el mes de Marzo de 68, Leandra estaba colocada en la casa núm \*\* de la calle de Don Toribio.

La noche del 29 del mes antedicho, sintiéndose con los dolores que anuncian el trabajo del parto, se dirigió á los inodoros. Una vez allí, Dios y su conciencia saben lo que pasó. Hé aquí lo que la justicia cree haber puesto en claro.

En la segunda declaracion, la reo empezó por afirmar, que habiéndose sentido próxima al alumbramiento, se dirigió á los comunes, en los que se sentó de manera que el feto en su salida cayera hácia dentro, y lo consiguió, no habiéndose atorado para nada al caer; y que el único motivo que tenia para proceder así, era el no aparecer deshonrada á la vista de sus amas. El juez le preguntó entónces cómo era el feto, y ella contestó *que blanco y tenia los ojos cerrados, de media vara de tamaño y que era chatito*; segun estas señas, que eran muy exactas, resultó que el alumbramiento no podía haber sido como ella lo habia pintado, pues que de semejante modo no habria podido ver á su hijo; el juez le hizo esta observacion, á lo que ella contestó que al nacer el niño habia caido *abajo: no abajo, sino en el pretíl, que lo estuvo examinando tres minutos, pasados los cuales lo empujó con las manos. . . . que no habia llorado sino que solo se bullia*.

Despues de concluido el alumbramiento, Leandra volvió á la cocina, en donde se acostó. A otro dia, como á las siete de la mañana, fué á verla su hermana, que sorprendida por el flujo de sangre que notó en ella, preguntóle de qué provenia: ella contestó que era la menstruacion; pero dos horas despues, apremiada por una de sus amas que habia encontrado huellas de sangre en la cocina y hasta en los pretilos de los inodoros, lo confesó todo.

Inmediatamente que la autoridad tuvo conocimiento del suceso, Leandra Valderas fué

\* M. du Cau p. Le élan du vol à Paris.

en calidad de detenida al Hospital Municipal de San Pablo, y se procedió á la extraccion del feto. Logróse esto y despues de haberlo visto el juez, procedieron á hacer los médicos la autopsia para operar la docimasia hidrostática.

Esto dió por resultado que el niño habia nacido vividero y que habia respirado. En efecto, extraídos los pulmones y el corazon, éstos sobrenadaron, señal de la presencia del aire en ellos: lo mismo habia sucedido con los fragmentos en que dichos órganos fueron divididos, mostrando además la coloracion rosada de los pulmones huellas que en ellos habia dejado el oxígeno del aire respirable.

Declarada bien presa la Valderas, y despues del exámen de los testigos y demás diligencias judiciales, se le hizo la confesion con cargos, resultando de ella una cosa que ya podia traslucirse con horror desde la primera parte del proceso, y era que aquella desgraciada habia cometido un delito, sin saber por qué; pues que el motivo que ántes habia dado, no tenia valor alguno, puesto que ella sabia bien que sus amas conocian perfectamente su estado.

Y en vista de un tan profundo desórden en las facultades del ser moral, en vista de aquel crimen sin motivo é inútil, y que por lo mismo denunciaba un trastorno latente, pero real en el individuo, ¿la justicia humana era competente?

El defensor de la reo en primera instancia alegó las circunstancias atenuantes.

Despues de establecer la diferencia que existe entre las causas que puedan producir la muerte de un niño, siendo éstas ó por comision ó por omision; la falta de aire respirable, la estrechez del local y la angustia del momento, produjeron evidentemente, dice el defensor, la muerte del niño; pero este es un delito por omision, que disminuye la culpabilidad de la Valderas: y así es que, cuando la reo arrojó á su hijo para dentro de los inodoros, arrojó un cadáver, cosa que muda el aspecto de la cuestión.

Y luego, es evidente que aquella desgraciada era presa de la enajenacion mental, en que segun los autores, caen muchas mujeres durante la preñez; de otra manera semejante crimen seria imposible.

Concluia pidiendo para su defendida la menor pena posible.

El Juez 5º dictó el siguiente fallo:

México, Octubre 2 de 1868.

Vista esta causa instruida contra Leandra Valderas, de México, soltera de veintiseis años y con habitacion en la calle de Don Toribio núm. 12, por el infanticidio cometido la noche del 29 de Marzo del presente año; consideraun-

do: Que en las circunstancias relativas al estado del niño como respecto de la madre, circunstancias que los criminalistas requieren como indispensables para admitir la realidad del infanticidio, están plenamente justificadas. Respecto del primero, es inconcuso que era cumplido, segun consta del certificado de los facultativos á fojas 10: Que del exámen de los órganos respiratorios en el experimento conocido con el nombre de *Docimasia Hidrostática*, resultó que nació vivo y respiró, supuesto que así se deduce de la ligereza específica y gravedad absoluta de los pulmones y el corazon, que extraídos de la cavidad torácica sobrenadaban al ser puestos en el líquido para efectuar el experimento; sin que pueda atribuirse la supernatacion á la putrefaccion que empezaba á desarrollarse, supuesto que no solo dichos órganos permanecian en tal estado unidos entre sí y con el corazon, sino que tambien separadamente y divididos en fragmentos, siendo de advertir, que aunque por el desarrollo de sustancias gaseosas producidas por la putrefaccion pueden sobrenadar intactos, no sucede lo mismo al dividirse en pedazos, pues éstos recobran la gravedad específica por el desprendimiento de los gases, yendo en consecuencia al fondo, circunstancia que no se verificó en este caso. Debe atenderse tambien á la coloracion que presentaban los pulmones al ser abierta la cavidad torácica, supuesto que los autores médico-legales enseñan, que si el niño no ha respirado, el color de los órganos referidos es moreno ó violado, no encontrándose el color rosado, como en el presente caso, sino por el efecto de la respiracion. No debe considerarse tampoco que el niño murió durante el trabajo del parto, porque la contraccion de la matriz empujara la cabeza contra la pélvis, causándole las contusiones que se le encontraron en la frente y en los lados izquierdo y derecho de la cabeza, supuesto que los producidos por causa de la compresion sufrida durante el parto, son por lo comun superficiales, y no conteniendo sino infiltracion tan solo en el tejido celular. siendo así que en el presente caso al abrir el cráneo, se encontró en su cavidad sangre, así como las meninges y superficies del cerebro estaban teñidas por el mismo líquido, presentando inyeccion, lo que manifiesta evidentemente, que las referidas contusiones causaron extragos profundos, debiéndose atribuir á violencias criminales que determinaron la muerte del niño, como consta del certificado ántes referido de fojas 10. Esto tiene mayor fuerza, si se considera que la Valderas en su ampliacion á fojas 8 expresó: que habiendo caido sobre la tabla de los inodoros, lugar en que se verificó el alumbrado:



miento, el niño se movía, lo que indica que vivía después de la expulsión. Estando manifestadas hasta aquí las circunstancias relativas al niño, se debe atender á las que concurrían en la madre y que se requieren para la prueba perfecta del presente delito, y son, primero: el parto reciente plenamente justificado en el proceso por su propia confesión; los vestigios que son consecuencia natural del alumbramiento y que se encontraron en el lugar donde se verificó, así como la certificación que obra á fojas 4: segundo: el cadáver del niño presentaba en algunas partes la coloración verdosa, que indica la putrefacción incipiente que era natural se desarrollase, supuesto que el niño estuvo por más de treinta horas sujeto á los efectos de las sustancias fecales que se encontraban en las inodoros, indicando que la época del parto coincidía perfectamente con el estado del cadáver del niño, y tercero: que es indudable que este es el mismo niño que dió á luz la Valderas, pues que fué extraído en el lugar en donde dijo se encontraba desde su preparatoria por el inspector Aniceto Hernandez, á presencia de los vecinos de la casa. Por todo lo expuesto se vé que el delito está justificado, con la plenitud que se requiere para los de este género. Lo está asimismo la persona del delincuente, por su propia confesión y las declaraciones de María Antonia Silva y Marín Ramirez, á quienes la reo manifestó haber cometido semejante delito. El infanticidio, objeto de esta causa, ha sido por comisión y no por omisión, pues que la muerte fué causada por las contusiones, como ántes se ha referido, que probablemente recibió el feto al ser arrojado por el agujero de los inodoros y no por la omisión de los medios que debieron ponerse para que continuase viviendo, supuesto que había nacido capaz. No debe aceptarse como atenuante la circunstancia que expresa haberla determinado á cometer tan horrendo crimen, supuesto que no ocultó á sus amas ante quienes dice no quería deshonrarse, el estado que guardaba en todo el tiempo de la preñez; no tenía por lo mismo que ocultar al niño, porque el alumbramiento era consecuencia natural de la preñez y debía considerarse deshonrada desde la época en que ésta fuera conocida y no precisamente por el parto. El infanticidio, pues, de que se trata, debe reputarse cometido voluntariamente, en cuyo caso tiene el carácter de homicidio alevoso: debe reputarse también premeditado, supuesto que la Valderas fué á los inodoros con el único objeto de alumbrar y en seguida hacer desaparecer al niño, lo que logró por otro medio del que al principio se había propuesto. La ley 8ª, tít. 8º, Part. 7ª, impone á la mujer que se die-

se golpes en el vientre con el objeto de hacer morir al feto animado, la pena de muerte, pudiéndose considerar referente á la 7, tít. 3, lib. 6 Fuero-Juzgo, que dispone: «que si alguna mujer libre ó sierva, matare su filio, pues que es nada, el juez de la tierra, luego que lo supiese condempnala por muerte. E si non la quisiere matar ciéguela.» Posteriores á estas leyes no existen ningunas que castiguen especialmente el delito de infanticidio, por lo que los criminalistas enseñan, que para la imposición de la pena debe atenderse á las prescripciones de las leyes citadas, estando como está en desuso la que impone la ley 12, tít. y Partida citada, al reo de parricidio y al que se equipara el delito presente. En atención á lo hasta aquí expuesto; á lo alegado por el defensor de oficio C. Pablo Vigueras y todo lo que ver convino: Fallo que debía condenar y condeno á Leandra Valderas por el delito de infanticidio, con fundamento de las leyes ántes citadas, á que sufra la pena de muerte en el lugar y forma de costumbre. Hágase saber y remítase á la superioridad para los efectos á que haya lugar. Y así definitivamente juzgando lo decretó y firmó el C. Juez 5º del ramo criminal, Lic. José María Castellanos. Doy fe.—*J. M. Castellanos.—Lic. Valentín Cana-lizo*, secretario.

Habiendo apelado la reo del auto anterior, pasó la causa á la tercera Sala del Superior Tribunal, en donde el nuevo patrono de la Valderas pidió que su acusada fuese absuelta del cargo, por no existir las pruebas plenas del delito, que requiere la ley.

Fundado el defensor en los autores citados por Escriche (artículo Infanticidio, números 11 y 24), demuestra que la Docimasia Hidrostática no puede ser una prueba concluyente en favor de la viabilidad del feto. Opinión apoyada por Goyena, Febrero ref., Derecho Penal, lib. 4º, tít. 9, § 3, núm. 171. Todo lo que consta en autos, añade el abogado, respecto al delito cometido por la Valderas, probará que Leandra Valderas dió á luz un niño en los inodoros de la casa núm. 12 de la calle de Don Toribio, la noche del 29 de Marzo de 1868, y que al otro día halló el inspector en aquellos lugares un niño muerto. Y nada más. Pero no están probadas ni la identidad del cadáver con el hijo de la Valderas, ni que ésta haya cometido el delito. Todas son probabilidades, meros indicios. Por consiguiente, no existe el cuerpo del delito. (Goyena, loc. cit.)

La otra prueba que se aduce es la que resultaría de la confesión de la Valderas; pero ha habido por parte de la acusada dos confesiones contrarias, y en caso de duda, debemos atenernos á la primera, que le favorece (Gutierrez,

Pract. criml., Part. 1ª, seccion 1ª, Cap. 7, núm. 2, Covarrúvias, Var. Res., lib. 2, cap. 13, núm. 8; &c.) O segun otros autores, en el caso anterior deben tenerse por falsas ambas confesiones. (Baldo en la ley gest. Col. 2, C. de re judicata. Autore in cap. cum in tua de testibus. col. 3ª)

Además, para que la segunda confesion de la Valderas revocase la anterior, debia tener ciertos requisitos de que absolutamente carece. (Mitermaier, Par. 4ª, Cap. 33.)

El defensor hace juiciosas reflexiones sobre la confesion de la Valderas; encuentra en la expontaneidad con que entra en los menores detalles algo que no es natural, y en esto le ayuda Quintiliano en sus declamaciones 313 y 314, Cap. 1º de Prob.—Y Gutierrez en la parte 1ª de su Pract. Crim. enseña que un inocente puede muchas veces confesar, haziado por la prision, cansado de la vida, ó porque la sagacidad de un escribano se la arranque, etc.

Pasando en seguida del hecho solo de la confesion á lo que su patrocinada ha contestado, pone en duda, apoyándose en elocuentes palabras de Ciceron, y aun en las de la primera sentencia que dicen: “que no tenia por lo mismo porque ocultar al niño,” pone en duda, deciamos, la verosimilitud de un hecho sin causa ni motivo y que la razon humana no puede concebir de este modo, y como ha dicho Bentham, “todo acto protegido por una sancion tutelar, la de la naturaleza, la de la religion, la de la ley ó la del honor, se hace mas ó menos improbable.”

El estado en que en aquel acto se hallaba la madre, no le permitia juzgar de lo viable del recién nacido (Mitermaier) y acaso en realidad no lo era, pues no lloró, sino tan solo se movió. (Dictámen del Dr. Danyan en el proceso de infanticidio de la Dame Lemaine.—Procès celebres contemporains.)

La confesion de la reo carece de otros requisitos, la persistencia y la uniformidad, como puede verse en los autos en donde en el mismo momento de la diligencia se contradice dos ó tres veces.

Y luego, ¿cómo podia la Valderas haber visto á su hijo si estaba en un lugar oscuro? Si lo arrojó con las manos, segun la confesion, ¿cómo al salir de los inodoros las llevaba limpias?

El Dr. Marc, dice: “Todos los médicos convienen en que cuando la pélvis de la mujer es ancha, pequeña la cabeza del niño y repentino el parto, puede entónces efectuarse con tanta rapidez la expulsion del feto, que la madre se halle sorprendida y no tenga tiempo de tomar precaucion alguna para evitar la caida de su hijo.”

La Valderas tuvo un parto repentino, que

duró ménos de 15 minutos, la cabeza del niño era chica, el término no estaba cumplido, pues segun Orfila, el largo de los fetos de 9 meses es de 50 á 60 centímetros, y el de la reo tiene apenas media vara.

Así es que sorprendida la reo por el vértigo en aquel momento, es de creerse, que exánime y fatigada dejó escapar al niño, y esta es la única explicacion que conforme con la primera confesion de la acusada, puede darse al hecho que se juzga.

Pero aun cuando la confesion citada, continúa el defensor, no tuviese las tachas que se han expuesto, no es una prueba plena ni basta para una condenacion capital. (L. 5ª, tít. 13, Part. 3ª; 17, tít. 15, Part. 7ª, et glos. Vilanova, Obs. 9, cap. 7, núm. 55; Gutierrez, Pract. crim., Part. 1ª, cap. 7, núm. 1 y 15, etc., etc.)

De lo expuesto anteriormente, el defensor deduce, que de las tres pruebas: declaracion pericial, indicios y confesion de la reo, ninguna es bastante á probar el cuerpo del delito. Luego segun la opinion de los autores, para decirse probada por la confesion la persona que cometió el delito, es preciso que ademas de que conste primero é independientemente el cuerpo del delito, haya una prueba por separado que demuestre la criminalidad de la persona; ¿y cual es aquí esa prueba? ¿acaso la confesion extrajudicial de la Valderas á las testigos Antonia Silva y Marin Ramirez? ¿pero qué valor puede tener aquí la confesion extrajudicial, cuando la judicial no vale? ¿y prueban alguna cosa los testigos de oidas? Ley 28, título 16, P. 3.

En seguida, entrando el defensor en otro orden de ideas, hace por un momento la hipótesis de la existencia del delito; ¿por él merecerá la culpable la última pena?

El abogado cita las disposiciones de casi todos los códigos de las naciones civilizadas, y muestra que el mas severo de entre ellos, que es el austriaco, solo impone la pena de prision durísima de 10 á 20 años, ó de 5 á 10 segun el caso.

Pero hay ademas una prueba concluyente del aserto del defensor: el art. 23 de la Constitucion. Allí no se habla de infanticidio, sino únicamente de parricidio; ¿pero por qué en una cosa odiosa se ha de ampliar el sentido de esta palabra? Bacon ha dicho: “Rubricæ sanguinis «nec sunt, nec de capitalibus nisi ex lege nota «et certa pronunciato. . . nec vita eripienda «nisi ei qui se in suam vitam peccare prius «nosset.» (Afor. 39.)

A pesar de la hábil defensa que hemos extractado, la conviccion legal de los jueces estaba formada por el perfecto acorde de la par-



te esencial de la segunda confesion, con todos los indicios admitidos en casos semejantes por las leyes, y aun cuando el fallo de primera instancia fué revocado en cuanto á la pena que imponia, las sentencias de la 2ª y de la última, consideraron como probado el cuerpo del delito y la persona del delincuente, condenando á Leandra Valderas, como á continuacion puede verse.

México, Julio 15 de 1869.

Vista esta causa seguida de oficio en el Juzgado 5º de lo criminal de esta ciudad, contra Leandra Valderas, de México, soltera y de veintiseis años de edad, por el delito de infanticidio; vistas las diligencias practicadas en averiguacion del delito; la defensa de la reo hecha en primera instancia, por el C. Lic. Pablo Vigueras; la sentencia del inferior, en la que con fundamento de la ley 8ª, tit. 8º, P. 7ª, y 7, tit. 3, lib. 6, Fuero Juzgo, se le impuso la pena del último suplicio; la apelacion que de este auto interpuso, y oido lo alegado por el ciudadano fiscal y el patrono de dicha reo al tiempo de la vista, con todo lo demás que era de verse y ver convino: atendiendo á que no consta de una manera evidente, que en la palabra parricida de que se usa en el art. 23 de la Constitucion, esté comprendido el infanticidio: que en caso de duda debe mas bien favorecerse al reo, y que tampoco está probada la premeditacion, por unanimidad se falla: Primero: por las consideraciones expuestas por el ciudadano fiscal al tiempo de la vista, se revoca la sentencia de primera instancia, haciendo uso del arbitrio de la ley 8ª, tit. 31, P. 7ª, y con fundamento del art. 30 de la de 5 de Enero de 1857: Se le imponen diez años de servicio de cárcel con descuento de la prision sufrida. Segundo: Hágase saber y remítase la causa á la 1ª Sala para los efectos legales. Así lo proveyeron y firmaron los ciudadanos Presidente y magistrados que forman la 3ª Sala de este Superior Tribunal del Distrito.—*Cárlos Echenique*.—*José María Herrera*.—*José María Guerrero*.—*José P. Mateos*, secretario.

PRIMERA SALA.

México, Agosto 28 de 1868.

Vista esta causa instruida contra Leandra Valderas, por infanticidio; la sentencia de 2 de Octubre del año próximo pasado de 1868, pronunciada por el ciudadano Juez 5º de lo criminal, en que con fundamento de las leyes 8ª, tit. 8º, P. 7ª, y 3ª, tit. 6º del Fuero Juzgo, condenó á la reo á la pena del último suplicio; la sentencia pronunciada por la 3ª Sala de este Tribunal el 1º de Julio del presente

año, en la cual, haciendo uso del arbitrio de la ley 8ª, tit. 31, P. 7ª, con fundamento del artículo 30 de la ley de 5 de Enero de 1867, revocó la sentencia de 1ª instancia é impuso á la misma reo, diez años de servicio de cárcel con descuento de la prision sufrida; lo alegado al tiempo de la vista por el patrono de la citada reo, con lo demás que se tuvo presente y ver convino. Considerando: que la palabra parricidio tiene dos sentidos legales, uno propio y riguroso que indica su etimología, en el que significa la muerte dada por un hijo ó hija al padre ó á la madre; y otro ménos propio ó mas genérico, en que se comprende la muerte dada á alguna de las varias personas enumeradas en las leyes 18, tit. 5º, lib. 6º del Fuero Juzgo, y 12, tit. 8º, P. 7ª, con las que unian al culpable vínculos de parentesco ménos estrechos que los que lo ligaban con los autores de su vida, de afinidad y aun otros ménos respetables: que al abolir desde luego el art. 23 de la Constitucion de 1857, la pena de muerte, autorizando su imposicion en los delitos determinados que enumera, y al mencionar entre ellos el parricidio, debe juzgarse que tomó esa palabra en su sentido legal, propio y riguroso, pues en él se entiende que hablan las leyes, mientras no haya motivos racionales para creer lo contrario, porque esa inteligencia estricta la exige el carácter restrictivo y excepcional de la disposicion, de cuya aplicacion se trata, y porque si no se entendiera así dicho artículo constitucional, contra su mente bien clara, autorizaria á castigar con el último suplicio, aun al que da muerte á un pariente muy remoto, el que sin embargo es de su linaje, delito que poco difiere en su deformidad moral, del homicidio cometido en la persona de un extraño: que aunque la misma disposicion constitucional autoriza para imponer la pena de muerte al homicida alevoso, y aunque en el infanticidio hay siempre y necesariamente alevosía, ésta solo da mérito para agravar la pena é imponer como agravacion la de muerte cuando se trata de un delito que podia cometerse sin alevosía, no cuando ésta es una de las circunstancias constitutivas de él, como sucede con el infanticidio: que no puede estimarse como un homicidio alevoso, sino como un delito especial en que la circunstancia de no poderse defender la víctima de él, es uno de sus elementos constitutivos y esenciales: que aun el Fuero Juzgo que igualó en la ley 18, tit. 5º, lib. 6º, al parricidio propiamente dicho con la muerte dada á algun pariente afin, ú otra persona del linaje del matador, imponiendo una misma pena, la de muerte y confiscacion de bienes á los reos de todos esos varios delitos, bien diferentes en gravedad, con-

trayéndose en la ley 7, tít. 3º, lib. 6º, al delito específico de infanticidio, que es el cometido por Leandra Valderas, dejó al arbitrio judicial castigarlo con la pena de muerte ó con la de privacion de la vista, la que, aunque horrorosa y desusada por esa calidad en los tiempos modernos, es ménos grave que la de muerte: que para que una madre, quitando la vida á su hijo recién nacido, haga desaparecer las huellas de su embarazo y parto, puede haber incentivos tan fuertes, aunque no suficientes para justificar una accion tan contraria á los sentimientos de la naturaleza, que deban contribuir á atenuar su criminalidad que á primera vista se presenta con los caracteres mas repugnantes de crueldad y barbarie: que por consideraciones de ese género, ya en el Fuero Juzgo, ya en los Códigos penales modernos, se hace una apreciacion legal ménos severa del infanticidio propiamente dicho, y la muerte dada á un hijo por otra causa que no sea la de que la madre desée ocultar su concepcion y nacimiento: que por las consideraciones apuntadas, los criminalistas modernos censuran severamente á los pocos Códigos en que se ha conservado la pena de muerte para el infanticidio:

que por consideraciones análogas, en uno de los Códigos penales modernos, se considera como circunstancia atenuante en el infanticidio, que la prole en que se cometa no sea legítima, como no lo era el hijo á quien dió muerte Leandra Valderas. Con fundamento del art. 23 de la Constitucion federal, y de las leyes 7ª, tít. 3º, lib. 6º del Fuero Juzgo, y 8ª, tít. 31, P. 7ª, se reforma la sentencia de segunda instancia, y se impone á la reo Leandra Valderas, ocho años de servicio de cárcel con descuento de la prision sufrida. Recomiéndese al Juez, no extienda las declaraciones como lo ha hecho en esta causa, sino que asiente todo lo que digan los testigos, aunque sea reproduciendo lo que otro hubiere declarado ántes." Hágase saber y remítase la causa al inferior, con testimonio de este auto para su cumplimiento, y el toca respectivo á la tercera, con igual testimonio. Así por unanimidad lo proveyeron los ciudadanos Presidente y magistrados que forman la 1ª Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito: y firmaron.—*Manuel Posada.*—*Pablo M. Rivera.*—*A. Zerecero.*—*José Arteaga.*—*Cayetano Gomez y Perez.*—*Francisco T. Gordillo*, secretario.

## VARIEDADES

### CRONICA JUDICIAL

La Suprema Corte tiene que resolver una de las mas graves cuestiones constitucionales, á que han dado origen las controversias promovidas por los Estados de Veracruz y Querétaro contra los poderes de la Union. El primero créese, que la ley de 12 de Abril que suspendió las garantías para plagiarios y ladrones ataca su soberanía; y el segundo, que el acuerdo del Congreso general, en virtud del que se mandó que la fuerza de la federacion interviniere en las disidencias de los poderes de aquel Estado, menoscaba su independencia. La prensa ha tratado en estos dias la cuestion, y en este número publicamos un artículo de uno de nuestros apreciables colaboradores sobre la misma materia. Los escritos del Sr. Lic. D. Leon Guzman, ilustrando este punto de nuestro de-

recho constitucional, en su calidad de Procurador general de la nacion, son dignos de llamar la atencion pública, por la conviccion y estudio que desde luego revelan; y aunque en el fondo no somos de la opinion de tan apreciable jurisconsulto, y tal vez mas adelante expongamos en el *Derecho* los fundamentos de nuestro parecer, nos es grato confesar el tino é ilustracion de su trabajo.

El gobernador de Coahuila ha acusado al juez de Distrito ante la Suprema Corte de Justicia por infraccion de la ley de amparo de garantías. El caso que dió margen á esto no deja de ser curioso.

La junta patriótica comisionó á D. Estéban García para que adornara el templete que se levantó en la alameda del Saltillo para celebrar las fiestas cívicas de Setiembre. El dia 16 se

presentó el gobernador con todas las autoridades y convidados en dicho templete, y lo encontraron ridículamente compuesto, y además con una multitud de yerba y zacate aglomerado con este lema significativo: *Para los pueblos que quieren ser libres*.

El gobernador y las autoridades se molestaron con estas cosas, y el primero gubernativamente impuso á D. Estéban García una pena alternativa, de quince pesos de multa ó tres dias de arresto. No quiso García pagar aquel dinero, y los policías lo condujeron á la prision. El multado pidió amparo al juez de Distrito, quien mandó suspender el acto de la prision. El gobernador no obedeció al principio; pero al fin sucumbió al poder federal y puso en libertad á García, dirigiéndose en seguida al Supremo Tribunal de Justicia de la nacion, entablando un juicio de responsabilidad contra aquel funcionario de la federacion.

Tambien ha sido acusado por el Ministerio, parece que por irrespetuoso, segun se nos ha informado, el juez 6º de lo criminal Lic. D. Eduardo Arteaga.

La acusacion contra el juez 6º de lo civil, Lic. Guerrero, con motivo del amparo frustrado que habia concedido á Ibar, sigue su curso. Con este motivo el colegio de Abogados, segun dice la *Revista*, ha nombrado á los señores D. Manuel Castañeda y Nájera y D. Gabriel Mª Islas para que se encarguen de la defensa del Sr. Lic. D. Isidoro Guerrero, juez 6º de lo civil de esta capital, en el juicio que sobre responsabilidad le ha mandado abrir el gobierno, por haber ordenado suspender la ejecucion de D. Pedro Ibar, agregando nuestro colega, que los defensores nombrados por el Colegio de Abogados, se asociarán al muy respetable jurisconsulto D. Bibiano Beltran, á quien el Sr. Guerrero ha recomendado su defensa.

No fué el Sr. D. Agustin Arévalo el nombrado para el juzgado 5º de lo civil, como nos lo habia asegurado una persona respetable, sino el Lic. D. Cristóbal Tello que está ya funcionando.

La Suprema Corte de Justicia ha dirigido una comunicacion al gobierno con fecha 9 del corriente, en la cual manifiesta la necesidad de que se expidan las leyes orgánicas, y recomienda que se inicien ante el Congreso y se excite el patriotismo de los representantes para

que cuanto ántes se decreten. Entre ellas cuenta como mas urgentes la que señale los casos de responsabilidad, la gravedad de cada uno y la pena; la que decida definitivamente todo lo relativo á recursos de amparo; la de expropiacion por causa de utilidad pública; la de procedimientos de la justicia federal; la de los que deben observarse en los casos de controversia entre la Union y los Estados. La Corte cree tambien que es urgente un arreglo nuevo y definitivo en la legislacion fiscal.

TENTATIVA DE ROBO.—Desde hace algun tiempo, la policía habia tenido aviso de que varios individuos acechaban el momento oportuno de efectuar un robo en las oficinas del papel sellado, y les seguia los pasos, hasta que con las pruebas necesarias procedió á aprehenderlos, encontrándoles las ganzúas é instrumentos necesarios para llevar á cabo su robo.

JUICIO DE AMPARO.—El juez de Distrito de Durango amparó á D. Juan N. Flores contra la providencia del gobierno del Estado, por la que se cobraba y se habia cobrado á Flores la mitad de las contribuciones que pagaba la fábrica de hilados de Guadalupe, por todo el tiempo que estuviera paralizada.

Hé aquí el resúmen general de los reos aprehendidos por la inspeccion general de policía y resguardo diurno y nocturno, desde el 1º al 30 de Setiembre:

Por la inspeccion general de policía.	240
Por el resguardo diurno. . . . .	1,041
Por el resguardo nocturno . . . . .	514
Total de reos. . . . .	1,795

ARRONIZ Y MADRID.—Hace tres dias llegaron estos señores á esta capital procedentes de Acapulco, de donde fueron remitidos con escolta. Creemos que ahora no habrá ya motivo alguno para que se demore la resolucion del negocio del papel sellado, supuesto que ya no falta la presencia de ninguno de los que aparecen responsables.

Hoy debe verse ante el gran Jurado, la cau-



sa del gobernador de Querétaro. Es su defensor el Lic. D. A. B. de E. y Caravantes.

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.—La causa de la emancipacion civil de las mujeres, acaba de dar un gran paso en Inglaterra. En su sesion del miércoles 21 de Julio, la cámara de los comunes ha adoptado por 131 votos contra 32, es decir, con una mayoría de 99 votos, el *bill* relativo á los derechos de propiedad de las mujeres casadas.

Esta cuestion necesitaba ser resuelta, no solo en Inglaterra. Nuestro código Napoleon requiere á este respecto reformas urgentes. ¿No es irregular que una hija mayor, el dia que se casa, llegue á ser, *ipso facto*, menor y sin las cualidades que exige la ley?—(*La Liberté*.)

## CAUSAS CÉLEBRES

### INQUISICION DE MÉXICO.—AÑO DE 1810

#### PIEZA SEGUNDA

#### EL SR. INQUISIDOR FISCAL DE ESTE SANTO OFICIO

Contra el Br. Don Miguel Hidalgo y Costilla, cura de Dolores, en el obispado de Valladolid. Hereje formal.

(CONTINUA.)

Declaracion del Sr. Coronel de Celaya D. Manuel Fernandez, persona de carácter, veracidad y digno de fé.

En la ciudad de Querétaro, á veinticuatro dias del mes de Noviembre del año de mil ochocientos diez, por la mañana á las nueve y media, ante el Dr. D. José Rafael Gil de Leon, cura de la parroquia de Santiago, juez eclesiástico de dicha ciudad, y comisario del Santo Oficio de la Inquisicion de corte; y D. Juan de Salazar, notario del mismo Santo Tribunal, que tiene jurado el secreto, compareció citado un caballero que juró en forma, por Dios Nuestro Señor y la señal de la Santa Cruz, decir verdad en todo lo que supiere y fuere preguntado, y guardar el secreto en cuanto á estas diligencias perteneciere; en cuya virtud dijo ser y llamarse el Sr. D. Manuel Fernandez Solano, natural de la ciudad de Logroño, provincia de la Rioja, vecino de la ciudad de Celaya de este reino, y coronel de su regimiento de milicias, casado con la Sra. D<sup>a</sup> Mariana Bautyosa, y se halla en esta ciudad por las circunstancias del dia, de sesenta y cinco años de edad.

Preguntado: si sabe ó presume la causa pa-

ra qué ha sido citado de orden del Santo Oficio? dijo: que ni la sabe ni la presume.

Preguntado: si sabe ó ha oido decir que alguna persona haya hecho ó dicho alguna cosa que sea ó parezca ser contra nuestra Santa Fé católica, Ley Evangélica, que enseña y predica nuestra Santa Madre Iglesia católica, apostólica, romana, ó contra el recto y libre ejercicio del Santo Tribunal? dijo: que nada sabe ni ha oido decir cosa alguna relativa á la pregunta.

Preguntado: si sabe ó ha oido decir que un presbítero haya predicado ó enseñado, sembrando las impías máximas de que no hay infierno, purgatorio ni gloria? Dijo: que ni sabe ni ha oido decir que presbítero alguno haya sembrado las dichas impías máximas, ni en el púlpito, ni en ningun otro paraje; pues á saberlo ya habria ocurrido al Santo Tribunal á delatarlo, segun la obligacion que tiene como católico cristiano que es.

Preguntado: si ha llegado á su noticia por la presente conversacion del dia, de que el cura de los Dolores D. Miguel Hidalgo, haya ó en su propio curato, ó en la Villa de San Miguel, ó en la ciudad de Celaya, sembrado las impías máximas de que no hay infierno, purgatorio ni gloria? Dijo: que sin embargo de ser dicho cura el objeto de las conversaciones del dia, no ha oido decir que haya sembrado dichas impías máximas; pero sí ha oido en lo comun hablar contra su inmoralidad, mala conducta y libertad con que vivia en el pueblo de los Dolores; entregado á *diversiones* de baile y música, bebidas, juegos y versacion mala con mujeres como se lo ha oido decir á D<sup>a</sup> María Merced Enriquez, segun le parece, y vive en la calle de San Agustin frente de la Aduana, quien en conversacion ha dicho que asistió á un baile ó diversion que tuvo el cura de los Dolores, y allí presencié varias cosas que le parecieron indecentes y ajenas de un párroco. Que en lo demás, ni sabe, por no conocer al cura, ni ha oido decir con especialidad nada en contra de dicho cura, segun los términos de la pregunta.

Que esta es la verdad por el juramento que hecho tiene, que en lo declarado contra el cura de los Dolores D. Miguel Hidalgo, no ha procedido por odio, rencor ó mala voluntad que le tenga, sino por respeto á Dios Nuestro Señor, y en cumplimiento de su obligacion como católico cristiano que es. Y habiéndosele leído su declaracion y dicho estar bien escrita y asentada, se le encargó el secreto: lo prometió guardar y firmó con el presente señor Comisario, de

que doy fé.—*Dr. José Rafael Gil de Leon.—Manuel Fernandez Solano.*—Pasó ante mí, *Juan de Salazar*, notario familiar.

Ratificacion del Sr.  
coronel de Celaya D.  
Manuel Fernandez.

En la ciudad de Querétaro, á veintiseis dias del mes de Noviembre del año de mil ochocientos diez, por la mañana á las diez, ante el Dr. D. José Rafael Gil de Leon, cura de la parroquia de Santiago, juez eclesiástico de dicha ciudad y comisario del Santo Oficio de la Inquisicion de Corte, y D. Juan de Salazar, notario del mismo Santo Tribunal, que tiene jurado el secreto, compareció segunda vez el Sr. D. Manuel Fernandez Solano, coronel del regimiento de milicias de Celaya, quien por ante honestas y religiosas personas, los BB. D. José Francisco Ruiz, presbítero, sacristan mayor de la iglesia de la Congregacion de Guadalupe, y D. Juan Nepomuceno Acosta, presbítero, catedrático de latinidad del real colegio de San Javier, que tienen jurado el secreto, repitió su juramento en forma, por Dios Nuestro Señor y la señal de la Santa Cruz de decir verdad en todo lo que supiere y fuere preguntado, y de guardar el secreto en cuanto á esta diligencia perteneciere.

Preguntado: si se acuerda y hace memoria haber declarado en cosa perteneciente al Santo Oficio, ante algun Juez, por delitos de su conocimiento? Dijo y refirió en sustancia su dicho, y pidió se le manifestase y leyese.

Fuéle dicho, se le hace saber que el señor Inquisidor fiscal le cita por testigo *ad perpetuam rei memoriam*, en una causa que trata con el cura del pueblo de los Dolores, D. Miguel Hidalgo: que esté atento, se le leerá su declaracion, para que si en ella tuviere algo que añadir, alterar ó variar, lo haga de manera que en todo diga la verdad, se afirme y ratifique en ella, porque lo que ahora dijere, puede parar en perjuicio al referido cura. Y habiéndosele leído de verbo ad verbum su anterior declaracion, y héchole reconocer su firma; dijo: que aquella era su declaracion, y como estaba escrita y asentada era la verdad: que su firma era de su puño y letra, y la que comunmente usaba en todos sus negocios. Que nada tiene que alterar, añadir ni variar, porque como está escrita y asentada es la verdad, por el juramento que hecho tiene, en lo que se afirmaba y afirmó, se ratificaba y ratificó, y si necesario era lo decia de nuevo, no por odio ni rencor, ni mala voluntad que le tenga al referido cura, sino por respeto á Dios Nuestro Señor, en virtud del juramento y en cumpli-

miento de su obligacion como católico cristiano que es. Se le encargó el secreto, lo prometió guardar; y lo firmó con dicho señor comisario y personas honestas, de que doy fé.—*Dr. José Rafael Gil de Leon.—Manuel Fernandez Solano.—Br. José Francisco Ruiz.—Juan Nepomucen Acosta.*—Pasó ante mí, *Juan de Salazar*, notario familiar.

Declaracion de D.  
Manuel Marcelino de  
las Fuentes, sugeto de  
distincion, de hom-  
bria de bien, y dig-  
no de fe.

En la ciudad de Santiago de Querétaro, á ocho dias del mes de Enero de mil ochocientos once, por la tarde á las cuatro, ante el Dr. D. José Rafael Gil de Leon, cura de la parroquia de Santiago, juez eclesiástico de dicha ciudad y comisario del Santo Oficio de la Inquisicion de corte, y D. Juan de Salazar, notario del mismo Santo Tribunal que tiene jurado el secreto. Compareció citado, y juró en forma por Dios Nuestro Señor y la señal de la Santa Cruz decir verdad en todo lo que supiere y fuere preguntado, guardar el secreto en cuanto á esta diligencia perteneciere, en cuya virtud dijo ser y llamarse D. Manuel Marcelino de las Fuentes y Santa Coloma, natural de los reinos de Castilla; vecino de la Villa de San Miguel el Grande, en cuya villa obtiene el empleo de regidor, alférez real; y por ahora reside en esta ciudad, viudo de D<sup>a</sup> María Josefa de la Canal; de cincuenta y ocho años de edad.

Preguntado: si sabe ó presume la causa para que ha sido citado de orden del Santo Oficio? Dijo: que ni la sabe ni la presume.

Preguntado: si sabe ó ha oido decir que alguna persona haya hecho ó dicho alguna cosa que sea ó parezca ser contra nuestra Santa Fé católica, Ley Evangélica, que enseña y predica nuestra Santa Madre Iglesia católica, apostólica, romana, ó contra el recto y libre ejercicio del Santo Tribunal? Dijo: que nada sabe ni ha oido decir cosa alguna relativa á la pregunta, á excepcion de lo que ha oido decir casi á todos, del cura del pueblo de los Dolores, D. Miguel Hidalgo Costilla, sobre un manifiesto que hizo contra el Santo Tribunal, en defensa de su persona, por los capítulos de que le acusa el señor Inquisidor fiscal, cuyo manifiesto ha oido decir está impreso en Guadalajara, y no puede dar razon de él por no haberlo leído.

Preguntado: si á este relajado presbítero, ú á otro alguno ha oido ó sabe haya sembrado las impías máximas de que no hay infierno,

purgatorio ni gloria? Dijo: que sin embargo de no habérselo oído decir al referido cura Hidalgo, supo, sin acordarse ahora del tiempo y de las personas, que el expresado cura *negaba la eternidad de las penas del infierno, y aseguraba no había purgatorio*; agregándole en confirmación de esta verdad, que por lo mismo estaba *acusado al Santo Tribunal*; pero que el declarante nunca le oyó expresarse en los términos de la pregunta, ni antes de la insurrección ni en el tiempo en que anduvo preso con los insurgentes, pues en todo él no le habló una palabra.

Preguntado: si sabe que dicho cura en el pueblo de los Dolores, ó en San Miguel, ó en Guanajuato, ó en Celaya, ó en Valladolid, ha sembrado las referidas impías máximas? Dijo: que no sabe ni ha oído decir las haya sembrado en los lugares contenidos en la pregunta, refiriéndose en todo á la respuesta del contenido de la anterior.

Preguntado: si conoce de comunicacion y trato al dicho cura Hidalgo: cuáles sean el concepto en que lo tenga sobre su catolicismo y cristiandad: cuál sea el general y comun: si sabe de su vida, en orden al cumplimiento de la obligacion de párroco, y si atendia á su ministerio ó estaba disipado en otras cosas ajenas de su profesion? Dijo: que ántes de la insurrección lo comunicó y trató políticamente, y halló en él un hombre regular. Que lo tuvo en buen concepto, y creyó era un cura católico, y le parece que en este mismo concepto lo tenían

las personas que lo conocieron; pero despues de la insurrección, tanto el declarante como los demás, lo tienen por hombre irreligioso, impío é inhumano. Que era muy disipado, entregado á la industria como consta de las fábricas de loza y seda que tenia; y muy dado á la diversion de música y bailes que eran muy frecuentes, por lo que contrajo muchas deudas que jamás satisfizo; y que ha oído decir que era poco casto y mantenia mala versacion con mujeres, y esto es público y notorio.

Preguntado: si á mas de lo dicho sabe algunas otras cosas sobre la inmoralidad y conducta del referido cura Hidalgo: si sabe sea ó haya estado loco, ó enfermo, ó de tal suerte apasionado que no sepa lo que dice ó hace? Dijo: que á mas de lo dicho no sabe otra cosa que la de haber oído decir, que el referido cura rara vez decia misa y predicaba. Que no sabe sea ni haya sido loco, ni enfermo, en los términos de la pregunta. Que esta es la verdad por el juramento que hecho tiene: que en lo declarado contra D. Miguel Hidalgo, no lo ha hecho por odio, rencor ni mala voluntad que le tenga, sino por respeto á Dios Nuestro Señor, y en cumplimiento de su obligacion como católico cristiano que es. Y habiéndosele leído su declaracion, y dicho estar bien escrita y asentada, se le encargó el secreto, lo prometió guardar, y lo firmó con dicho señor comisario, de que doy fé.—*Dr. José Rafael Gil de Leon.*—*Manuel Marcelino de las Fuentes.*—Pasó ante mí, *Juan de Salazar*, notario familiar.  
(S. C.)

## LEGISLACION

MINISTERIO DE FOMENTO, COLONIZACION, INDUSTRIA Y COMERCIO.

### SECCION 3ª

Reglamento para la seguridad, policía, uso y conservacion de los caminos de fierro.

(CONCLUYE.)

Art. 9º Cada locomotiva tendrá un reloj para la exactitud en el servicio de los ferrocarriles.

Art. 10. Antes de la partida del tren, el

maquinista se asegurará que todas las partes de la locomotiva y del tender ó carro de alijo para combustible y agua, se hallan en buen estado, y de que funciona bien el freno de este tender. La misma verificacion se hará por los conductores guarda-frenos, en lo que respecta á los carruajes y á los frenos de estos carruajes.

Art. 11. Ningun convoy deberá partir de una estacion ántes de la hora designada por el reglamento respectivo.

Art. 12. En los puntos en que el maquinista no pueda ver bien á una distancia suficiente, se pondrán señales que le adviertan los pasos



difíciles, á fin de que luego que las perciba disminuya el movimiento del tren.

Art. 13. Los trenes no podrán detenerse sino en los lugares de estacion designados para el servicio de los viajeros ó de las mercancías, á no ser el caso de un accidente, de fuerza mayor ó de reparacion de la línea.

Art. 14. Los ferrocarriles deberán tener un telégrafo para su servicio.

Art. 15. Se colocarán á lo largo del camino durante el dia y la noche, tanto para conservar, como para la vigilancia de la vía, los guardas de que habla el art. 4º, para asegurar el libre curso de los trenes y la trasmision de las señales, de las que deberán estar provistos para anunciar, sea de dia ó de noche, si la vía está libre y en buen estado, si el maquinista debe disminuir el movimiento ó si debe detener inmediatamente el tren.

Art. 16. En el caso de que un tren ó una máquina aislada se detenga sobre la vía por causa de accidente, se hará la señal de detencion á la distancia de quinientos metros, ántes del punto en que haya acontecido.

Art. 17. En la aproximacion de las estaciones, de los pasos á nivel, de las curvas y de los subterráneos, el maquinista hará sonar el silbato de vapor para advertir que se acerca el tren. Lo mismo se practicará, siempre que la vía no parezca completamente libre.

Art. 18. Ninguna persona que no sea el maquinista ó el atizador podrá subir en la locomotiva ó en el tender.

Art. 19. Las empresas de ferrocarriles tienen obligacion de efectuar con cuidado y exactitud los trasportes de mercancías, bestias y objeto de toda clase que les sean confiados.

Art. 20. Siempre que suceda un accidente en un ferrocarril, sea por descuido de los empleados de él, mala construccion del camino ó por infraccion de las prevenciones contenidas en este reglamento, se hará efectiva la responsabilidad de la empresa, para lo cual se procederá á hacer la debida averiguacion por el juez respectivo, á fin de que segun el resultado que ella diere, se aplique al responsable la pena correspondiente, que podrá ser pecuniaria ó corporal, segun las circunstancias del hecho.

Art. 21. Las compañías de ferrocarriles están obligadas á someter á la aprobacion del gobierno las tarifas y los reglamentos que formen para el servicio y explotacion de los caminos de fierro.

Art. 22. Los que echaren sobre la vía férrea piedras ú otros objetos cualesquiera que sean, que puedan producir descarrilamientos ú otro accidente; los que robaren rieles; los clavos con que están asegurados ó cualesquiera

otro de los objetos colocados en la vía para darle seguridad; y los que desvien los rieles, quiten los durmientes ó causen algun otro daño en la vía férrea, por el que se comprometa la seguridad de los pasajeros, serán consignados al juez competente, para que se les juzgue y castigue segun las circunstancias y gravedad del delito.

Art. 23. Ningun trabajo podrá emprenderse para el establecimiento de caminos de fierro y de sus dependencias, sin la prévia autorizacion del Gobierno general. Los proyectos de todos los trabajos que se han de ejecutar se presentarán por duplicado al Ministerio de Fomento, para obtener su aprobacion: uno de estos ejemplares se devolverá á la compañía con el visto bueno del Ministro. Antes de la ejecucion como durante ella, la compañía tendrá la facultad de proponer á los proyectos aprobados las modificaciones que estime útiles; pero estas modificaciones no se llevarán á efecto, sino mediante la aprobacion del Gobierno.

Art. 24. El tramo y el perfil de un proyecto de vía férrea comprenderá:

I. Un plano general con escala de  $\frac{1}{10000}$

II. Un perfil longitudinal con escala de  $\frac{1}{5000}$  para las longitudes y de  $\frac{1}{1000}$  para las alturas. Debajo de este perfil se indicará por medio de tres líneas horizontales dispuestas al efecto, lo siguiente.

Las distancias kilométricas del camino de fierro, contadas desde su origen.

La longitud é inclinacion de cada pendiente ó rampa.

El radio correspondiente á cada una de las curvas del trazo.

III. Los perfiles trasversales en las curvas de la vía.

Art. 25. El ancho de la vía entre los bordes interiores de los rieles, deberá ser de un metro cuarenta y cinco centímetros (1,<sup>m</sup>45). En donde hubiere des vías, el ancho de la entrevía, medida entre los bordes exteriores de los rieles, será de (2,<sup>m</sup>00).

Art. 26. El ancho de las partes comprendidas de cada lado entre el borde exterior del riel y la arista superior del terraplen será de un metro (1,<sup>m</sup>00) por lo menos.

Art. 27. Se dejará al pié de cada talud del terraplen, una banqueta de cincuenta centímetros (0,<sup>m</sup>50) de ancho.

Art. 28. La compañía establecerá á lo largo del camino de fierro, los fosos ó alcantarillas que se consideren necesarios para que reciban las aguas del camino.

Art. 29. El radio mínimo de las curvas será de 100 metros.

Art. 30. El máximo de inclinacion en las pendientes y rampas será de tres por ciento.

Art. 31. No se permitirá que se ponga al

servicio público, sino despues de haberse emba-  
lastrado el tramo; quedando los travesaños cu-  
biertos en toda su extension.

Art. 32. Tampoco se permitirán ántes de  
haberse puesto á prueba, los puentes, viaduc-  
tos y alcantarillas.

Art. 33. La compañía no empleará en la  
ejecucion de las obras, sino materiales de bue-  
na calidad, debiendo conformarse á todas las  
reglas del arte, para tener una construccion  
perfectamente sólida.

Art. 34. A medida que los trabajos se ter-  
minen en tramos del ferrocarril, susceptibles de  
ponerse útilmente al uso público, la compañía  
dará parte al Gobierno, quien despues del reco-  
nocimiento que mande practicar, concederá ó  
negará el permiso para que se pongan los tra-  
mos en explotacion.

Art. 35. Las empresas de ferrocarriles pre-  
sentarán al Ministerio de Fomento en el mes  
de Enero de cada año, un informe que contenga  
las noticias siguientes:

1ª Los nombres de los accionistas y lugar  
de su residencia, hasta donde sea posible in-  
quirirlo.

2ª Los nombres y residencias de los direc-  
tores y demás empleados de la compañía.

3ª El importe del capital suscrito y la can-  
tidad que se hubiere pagado.

4ª El importe de lo que el gobierno mexicano  
hubiere dado como subvencion á la empresa.

5ª Una descripcion de la vía construida,  
obras de arte que se hayan ejecutado, estado  
que guarda y el costo que haya tenido.

6ª Informe de lo recibido por pasajeros en  
la vía.

7ª Informe de lo recibido por carga en la  
misma.

8ª Informe de los gastos de la compañía.

9ª Informe de la deuda de la compañía, ex-  
presando la clase de ella.

Por tanto, mando se imprima, publique, cir-  
cule y se le dé el debido cumplimiento. Dado  
en el Palacio Nacional de México, á 7 de Di-

ciembre de 1867.—*Benito Juarez*.—Al Ciu-  
dadano Blas Balcárcel, Ministro de Fomento,  
Colonizacion, Industria y Comercio.”

Y lo comunico á vd. para su inteligencia y  
fines consiguientes.

Independencia y libertad. México, Diciem-  
bre 7 de 1867.—*Balcárcel*.

MINISTERIO DE GOBERNACION.

El C. Presidente de la República se ha ser-  
vido dirigirme el decreto que sigue:

“*BENITO JUAREZ*, Presidente constitucional de los Estados-Uni-  
dos Mexicanos, á todos sus habitantes, sabed:

“Que el Congreso de la Union ha tenido á  
bien declarar lo siguiente:

“El Congreso de la Union, en ejercicio de  
la facultad que le concede el art. 51 de la ley  
electoral, declara:

“Es Presidente constitucional de los Esta-  
dos- Unidos Mexicanos, para el período que ter-  
minará el día 30 de Noviembre de 1871, el  
C. Benito Juarez, por haber obtenido la mayo-  
ria absoluta de los sufragios de los electores  
que votaron.

“Dado en el salon de sesiones del Congreso  
de la Union, en México, á diez y nueve de Di-  
ciembre de mil ochocientos sesenta y siete.  
—*Ezequiel Montes*, diputado presidente. —  
*Guillermo Valle*, diputado secretario.—*Joa-  
quin M. Alcalde*, diputado secretario.”

“Por tanto, mando se imprima, publique y  
circule. Palacio nacional de México, á veinte  
de Diciembre de mil ochocientos sesenta y sie-  
te.—*Benito Juarez*.—Al C. Sebastian Lerdo  
de Tejada, Ministro de Gobernacion.”

Y lo comunico á vd. para su conocimiento  
y fines consiguientes.

Independencia y libertad. México, Diciem-  
bre 20 de 1867.—*Lerdo de Tejada*.—Ciuda-  
dano gobernador del Estado de...